

124

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO - ORALIDAD
CIRCUITO DE BOGOTA
SECCIÓN SEGUNDA

EXPEDIENTE No. 2018 - 00085

Bogotá D.C.,

22 FEB. 2019

Ingresa al Despacho la CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL instaurada por el señor ANGEL MIGUEL CRISTANCHO HERNANDEZ contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL**, para lo siguiente:

I. ASUNTO

Decidir sobre el recurso de reposición, presentado por el apoderado del señor ANGEL MIGUEL CRISTANCHO HERNANDEZ, contra la decisión contenida en el auto de fecha seis (06) de abril de dos mil dieciocho (2018), el cual improbió el acuerdo conciliatorio contenido en el Acta de conciliación prejudicial con radicado No. 1670 (79772) de 28 de febrero de 2018.

II. SUSTENTACION DEL RECURSO.

Mediante escrito visible a folios 107 a 108 Vto. del expediente, el apoderado del señor ANGEL MIGUEL CRISTANCHO HERNANDEZ, sustenta la inconformidad respecto al auto que improbió la conciliación extrajudicial, indicando que por economía procesal se debe reconsiderar la decisión tomada en auto de fecha 6 de abril de 2018, y en cambio se oficie a la Dirección General de la Policía Nacional para que aclare la liquidación en los términos señalados por el Despacho, toda vez que la liquidación permite ser subsanada por desacierto y/o error u omisión cometido con la entidad convocada en cuanto a la liquidación de IPC.

Añade que los policiales en todos los grados, en las sentencias judiciales y conciliaciones prejudiciales de todo el país, los jueces las han aprobado, aplicando en algunos casos el principio de economía procesal sin ningún reparo. Por ultimo indica que los porcentajes de los años más favorables para los policías en el grado de Agentes son los años 1997, 1999 y 2002, los que se traen como base hacía el



futuro para mantener el poder adquisitivo de su pensión y manifiesta que otra cosa es el fenómeno de la prescripción de las mesadas no reclamadas, y en el caso específico sería con anterioridad al 16 de febrero de 2013.

III. TRAMITE

Secretaría fijo en lista el recurso por un día y corrió el traslado a la contraparte por dos días, sin embargo, el mismo no fue controvertido en el término de ley.

IV. CONSIDERACIONES.

En sentencia proferida el diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007)¹, la Sección Segunda en pleno del Consejo de Estado, señaló que a partir de la expedición de la Ley 238 de 1995 es viable incrementar la asignación de retiro y pensión de conformidad con el IPC, y que no es de recibo su negación, en razón a que incluso, la H. Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004 reconoció que la asignación de retiro se asimilaba a las pensiones de vejez o jubilación.

Por consiguiente, siendo la asignación de retiro una especie de pensión, el titular debe ser beneficiado por las prebendas consagradas en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993.

De igual forma, el Consejo de Estado en esa oportunidad señaló que la Ley 238 de 1995 era una ley ordinaria posterior a la Ley marco 4ª de 1992, que sólo debía ser inaplicada en caso de resultar contraria a la Constitución Política, por lo tanto, al no desconocer los preceptos constitucionales debía aplicarse, máxime cuando resulta más favorable al régimen contemplado para los miembros de la Fuerza Pública.

Adicionalmente, esa Alta Corporación indicó que el derecho al reajuste de la asignación de retiro con el porcentaje del IPC, debía ser reconocido hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 (diciembre 31 de 2004), que dispuso nuevamente el incremento anual de la asignación de retiro con fundamento en el principio de oscilación.

¹Consejo de Estado – Sección Segunda. Sentencia de mayo 17 de 2007, Magistrado Ponente Jaime Moreno García. Referencia 8464-05. Actor José Jaime Tirado Castañeda.



126

Esta posición ha sido reiterada por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en diversas sentencias, entre ellas conviene traer a colación la proferida el quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), dentro del expediente 2500023250002010005111 01, con ponencia del Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, donde respecto del reajuste de los miembros de la Fuerza Pública, recordó:

“...Recapitulando lo antes expuesto, estima la Sala que como se ha venido sosteniendo de tiempo atrás el correcto entendimiento del problema jurídico que se suscita en torno al reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, y la solución que ha planteado la Sala de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia de 17 de mayo de 2007, consiste en precisar, que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro, anualmente, y que en virtud de lo dispuesto en la Ley 238 de 2005 ese reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tuvo lugar de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, en tanto resultaba más favorable que el establecido por el gobierno nacional, en aplicación del principio de oscilación, que como resulta lógico, dicho incremento incidió positivamente en la base de la referida prestación, esto es incrementándola.

*Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del citado Decreto, **pero que en todo caso**, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con fundamento en fundamento la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004”.(Subrayado del Despacho).*

Del marco legal citado y de la anterior línea jurisprudencial se pueden extraer los siguientes presupuestos: *(i)* la asignación de retiro por su naturaleza es asimilable a la pensión de vejez o de jubilación, en consecuencia, le resulta aplicable el incremento que para éstas previó el legislador es decir, el incremento porcentual anual de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumidor – IPC; *(ii)* dicho reajuste procede solamente hasta el año 2004, cuando entra en vigencia el Decreto 4433 de 2004, *(iii)* el reconocimiento del reajuste modifica la base de la asignación de retiro para los años posteriores, *(iv)* se debe tener en cuenta la prescripción cuatrienal a partir de la fecha de presentación de la petición, para



aquellas prestaciones reconocidas con anterioridad a la expedición del aludido Decreto 4433.

27

De acuerdo al marco jurídico ya decantado para el caso bajo estudio, el Despacho revisó el acervo contenido en el expediente, evidenciando que la liquidación aportada por el Ministerio de Defensa, en el cual se efectúa el incremento con base en el principio de oscilación frente al incremento del Índice de Precios al Consumidor no son claros, en la medida en que no se avizoran los porcentajes sobre los cuales la entidad convocada estudió el incremento más favorable al demandante, conforme al régimen de oscilación y el que se hubiese obtenido de acuerdo a la variación del IPC (fol. 85 Vto. a 86); consecuencia a lo anterior el Despacho resolvió no aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes.

Ahora bien, el apoderado actor manifiesta que en virtud del principio de economía procesal que irradia el proceso, se debía oficiar al Ministerio de Defensa para que allegara la liquidación corregida respecto al acuerdo conciliatorio extrajudicial al que habían llegado las partes; sin embargo, ese procedimiento no es aplicable en este trámite, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, en la medida en que la Ley solo ha otorgado para las conciliaciones un control de legalidad, sin que exista normatividad aplicable a las conciliaciones que faculte al Juez para el decreto de pruebas; lo señalado, bajo el entendido que permitir la introducción de nuevos elementos probatorios, supondría la aplicación del derecho de contradicción y en consecuencia ejercer el derecho de defensa y como ya se dijo en precedencia, la Ley limita el trámite exclusivamente al control de legalidad.

Como consecuencia a lo expuesto, el Despacho no repondrá la decisión recurrida y se estará a lo resuelto en la providencia del día seis (06) de abril de 2018.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA - SECCION SEGUNDA;

V. RESUELVE

NO REPONER el auto calendado el seis (06) de abril de dos mil dieciocho (2018), conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ



